



NUE 190-A-2019 (SP)

**Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) contra
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Resolución Definitiva**

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con veinticuatro minutos del veinte de marzo de dos mil veinte.

Descripción del caso:

I. El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS)**, en adelante la apelante, en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**. La información solicitada por la apelante consistente en: "a) Se informe sobre las reuniones llevadas a cabo entre el año 2018 hasta la fecha que ejerció el señor Douglas Meléndez en su calidad de Fiscal General de la República con el Magistrado Óscar Armando Pineda Navas, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia; y, b) Sí hubo reunión con Douglas Meléndez con algunos u otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se le entregue la agenda que abordaron y los acuerdos tomados".

En fecha 23 de julio de 2019, la oficial de información con documento de referencia UAIP/409/RR//1157/2019 (3), resolvió:

"1. Confirmase la inexistencia de reuniones en los despachos del Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el ex Fiscal General de la República, en el período comprendido desde el año 2018 hasta la fecha que ejerció el señor Douglas Meléndez, respecto del tema requerido, tal como consta en el romano II de esta resolución;

2. Deniégase la entrega de la información relacionada con la sesión de Corte Plena de fecha 13 de septiembre de 2018, en la cual se recibió la visita del ex Fiscal General de la



República, por haber sido declarada como información reservada por dicho ente colegiado, según informó la Secretaría General;

3. Ordénese la entrega a la ciudadana Reina Maribel Sigarán de Lemus de los comunicados detallados al inicio de esta resolución, así como de la documentación anexa a los mismos (...)."

En ese sentido, la parte apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto, manifestando su inconformidad con dicha resolución, señalando que tal como expone en su primer escrito de apelación, la Secretaria General de la Corte habla de una supuesta reserva de la información y, por otro lado, los magistrados afirman no haberse reunido con el referido funcionario; es decir, que la resolución apelada es contradictoria. Asimismo, sostiene en su primer escrito, que la oficial de información de la CSJ debió entregar la documentación que acredite dicha reserva, y probar que se cumplió con lo establecido en los artículos 19 al 23 de la LAIP y 27 al 34 de su Reglamento, ya que no estableció con precisión cuales son las causales que provocan la reserva, debiendo saberlo (según lo expuesto en su escrito).

II. Este Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado René Eduardo Cárcamo para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 87 de la LAIP; sin embargo, posterior a acontecer su renuncia, le ha sido reasignado a la Comisionada Presidenta en funciones **Silvia Cristina Pérez Sánchez**. Asimismo, en pleno cumplimiento al derecho de defensa y audiencia de las partes, se solicitó la presentación a la CSJ del informe de justificación del acto impugnado conforme al Art. 88 de la LAIP.

III. El ente obligado rindió el informe solicitado, por medio de **Eva Marcela Escobar Pérez**, en calidad de apoderada Administrativa con cláusula especial del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien, en lo medular, afirmó que es inexistente la información concerniente a las reuniones del ex Fiscal General de la República con cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, considerandos individualmente, en el lapso requerido. Que, de forma colegiada, existe informe de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que señala que el pleno de ese ente obligado, sostuvo reunión con el

entonces titular de la Fiscalía General de la República, pero se declaró la reserva de dicha información, determinando únicamente fecha de su realización.

Por otra parte, mediante el mismo escrito, **Escobar Pérez** presentó prueba documental, consiste en: i) Acta número 65 que corresponde a la sesión de Corte Plena del 13 de septiembre de 2019; ii) Agenda de la sesión de Corte Plena del 13 de septiembre de 2018; iii) Resolución emitida por la CSJ en Pleno el día 17 de septiembre de 2019, mediante la cual se acordó clasificar como reservado el punto II de la sesión de Corte Plena del 13 de septiembre de 2018; y iv) Copia certificada del punto de acta de sesión de Corte Plena de fecha 24 de octubre de 2019, en la cual el Pleno acuerda reiterar los argumentos de defensa ya sostenidos. No omitiendo que por cada elemento probatorio que se oferta, la citada profesional realizó la determinación de la misma, de conformidad a su utilidad y pertinencia.

Posteriormente se realizó audiencia oral en la cual únicamente compareció en representación del ente obligado, su nuevo Apoderado Administrativo con cláusula especial **Giovanni Alberto Francisco Marinho Rosales y Rosales Rosagni conocido por Giovanni Alberto Rosales Rosagni**, sin contar con la representación del **Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS)**, no obstante estar citado y notificado en legal forma. En la fase de admisión probatoria, se tuvo por no admitida la aportación probatoria realizada por la parte apelante **SINEJUS** en virtud de no haberse realizado la determinación respecto a su utilidad y pertinencia. En cuanto al ofrecimiento probatorio del ente obligado, se tuvo por admitido el mismo de conformidad a lo establecido en el Artículo trescientos dieciocho del Código Procesal Civil y Mercantil.

Posteriormente, en la fase de alegatos el apoderado del ente obligado manifestó en lo medular que ratifica el contenido del informe de defensa, en el sentido que la información requerida fue declarada con reserva de conformidad al Art. 19 de la LAIP, que debido a la conjetura de los temas que se abordaron, se consideró que cumple con los requisitos de la ley. Posteriormente, en resolución suscrita el 17 de septiembre de 2019 el pleno de la CSJ acordó convalidar la reserva que dio origen a este proceso de apelación. Que la petición es que se esté a lo resuelto por la Unidad de Acceso a la Información de la CSJ el día 29 de julio de 2019 en la que se confirma la inexistencia de la información, respecto a la reunión individual de cada Magistrado de la CSJ y el ex Fiscal General de la República, y ratificar la



denegatoria de la información correspondiente a la sesión de Corte en Pleno del trece de septiembre de 2018, por constituirse en información reservada.

Análisis del caso

Este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación es pronunciarse sobre la entrega de la información relativa a: *“a) ...informe sobre las reuniones llevadas a cabo entre el año 2018 hasta la fecha que ejerció el señor Douglas Meléndez en su calidad de Fiscal General de la República con el Magistrado Óscar Armando Pineda Navas, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia; b) Si hubo reunión con Douglas Meléndez con algunos u otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se le entregue la agenda que abordaron y los acuerdos tomados”*.

Asimismo, consta en el expediente administrativo con referencia 370-2019 (3), que en prevención realizada por el ente obligado, la parte apelante aclaró su pretensión en el sentido de conocer todas las reuniones que *se hayan realizado ya sea con el Presidente de la CSJ o cualquiera de los catorce magistrados, donde se trataron temas respecto a las actividades de protestas por la vulneración a los derechos laborales, que se hagan por parte de los empleados del Órgano Judicial y los Sindicatos pertenecientes a este; en cuanto a la agenda, cuáles fueron los puntos específicos que se trataron y discutieron en las reuniones en comento, siempre relacionadas al tema anterior y cuáles fueron los acuerdos que se tomaron; También si hubo reunión con Corte Plena con el Ex fiscal Douglas Meléndez*. (Sic.)

En ese contexto, el examen del caso seguirá el íter lógico siguiente: (I) Principio de máxima publicidad y sus efectos; (II) Análisis del caso entorno a la valoración de la prueba aportada; y (III) Aplicación de una declaratoria de Reserva relacionada a la información concerniente a *“... reunión de Corte Plena con el Ex fiscal Douglas Meléndez...”*.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han establecido que el derecho de acceso a la información debe

estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones².

El Art. 4 letra “a” de la LAIP, establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

En tal sentido existe un estrecho vínculo entre el acceso a la información pública y una cultura de transparencia y rendición de cuentas, por parte de los funcionarios públicos, considerando la protesta constitucional realizada en torno a la asunción de su cargo, de ahí deviene el interés público o relevancia social de conocer si su actuar es conforme a sus atribuciones derivadas de la Constitución y de las Leyes. En tal sentido, el Art. 235 de la Constitución (Cn.), señala que todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo **protestará bajo su palabra de honor**, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, **prometiendo además, el exacto cumplimiento de sus deberes que el cargo le imponga**, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes.

A partir de ese análisis se puede colegir -sin duda alguna-, el sentido de la máxima divulgación entorno a la fiscalización ciudadana, la cual permite transparentar el cumplimiento de tal protesta, permaneciendo todo funcionario sometido al escrutinio público o rendición de cuentas respecto a todas las actividades que realice bajo esta investidura, es

¹ Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.p



decir, siempre que las realice en ejercicio de las funciones propias de su cargo y respecto del cual hizo la protesta respectiva.

En este caso en concreto tanto los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como el titular de la Fiscal General de la República, son funcionarios de segundo grado, que están sometidos al control ciudadano tal como se relaciona en el párrafo precedente, y aunque sea modificada la configuración del pleno magistrados de la CSJ y la FGR ha sido asumida por otro Funcionario, la obligación de transparentar su actuar es permanente en el tiempo.

Respecto al DAIP, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el mismo *genera obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos, de todos los niveles de gobierno...*. “...En este sentido, la resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información” del Comité Jurídico Interamericano indica que el derecho de acceso a la información, “se refiere a toda la información significativa, cuya definición debe ser amplia, incluyendo toda la que es controlada y archivada en cualquier formato o medio”³ (itálica y negritas suplidas).

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

Para este análisis, es dable traer a colación la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional respecto al DAIP, estableciendo que “...De conformidad con los arts. 2 y 3 LAIP, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada

³ El Derecho de Acceso a la Información en el Marco Jurídico Interamericano, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciembre 2009, pág. 6.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem

⁷ Ídem

o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna, con el objeto de propiciar la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los entes obligados, impulsar la rendición de cuentas de las instituciones públicas y promocionar la participación ciudadana en el control y fiscalización del ejercicio de la función pública, entre otros objetivos. Para tales fines, se ha previsto que la información pública debe ser de acceso irrestricto, salvo las excepciones que prevé la citada ley.” negrita suplidas (Sentencia emitida a las diez horas con treinta y tres minutos del día doce de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente con referencia 35-2016 Inconstitucionalidad).

Respecto a este control ciudadano, la Corte Interamericana ha reconocido que el Derecho de Acceso a la Información Pública *es una herramienta fundamental para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia, permitir el debate público y facilitar acciones ciudadanas para cuestionar, indagar y considerar si se está dando cumplimiento adecuados a las funciones públicas* ⁸(*itálica y negritas propias*).

II. A. Entonces, bajo este parámetro, en el presente caso se advierte que han realizado dos requerimientos distintos de información, por una parte, se solicita **1.** Informe sobre las reuniones llevadas a cabo entre el año 2018 hasta la fecha que ejerció el señor Douglas Meléndez en su calidad de Fiscal General de la República con el Magistrado Óscar Armando Pineda Navas, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia; y por otra, **2.** Si hubo reunión con Douglas Meléndez con algunos u otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se le entregue la agenda que abordaron y los acuerdos tomados.

Consta en el expediente administrativo, de fs. 20 a fs. 52, documentación respecto a la diligencia de búsqueda realizada por la oficial de información de la CSJ respecto del objeto de controversia del presente procedimiento, consistente en memorandos dirigidos a la Presidencia de dicho ente obligado, a la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la CSJ y a cada magistrado que conforma la Corte en Pleno, con sus respectivas respuestas, con las que se tiene por establecido que de forma individual no se realizó ninguna reunión

⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia emitida el 19 de septiembre de 2006, dentro del caso Claude Reyes y Otros vrs Chile.



con algún magistrado durante el período comprendido del año 2018 hasta que fungió como Fiscal General de la República, el señor Douglas Meléndez.

Al respecto el Art. 73 señala el trámite que se debe realizar a efecto de localizar la información requerida, existiendo en el presente caso acciones mínimas de búsqueda por parte de la oficial de información de la CSJ, quien a su vez emitió resolución razonada que acredita la inexistencia de la información correspondiente a: *“reuniones que se hayan realizado ya sea con el Presidente de la CSJ o cualquiera de los catorce magistrados, donde se trataron temas respecto a las actividades de protestas por la vulneración a los derechos laborales, que se hagan por parte de los empleados del Órgano Judicial y los Sindicatos pertenecientes a este...”*.

B. Ahora bien, respecto del segundo requerimiento de información correspondiente a establecer si existió: *“... reunión de Corte Plena con el Ex fiscal Douglas Meléndez...”*, con el acta número 65 que corresponde a la sesión de Corte Plena del 13 de septiembre de 2018 y la agenda de la misma, se tiene probada la concurrencia del –entonces– Señor Fiscal General de la República –Douglas Meléndez– a la referida sesión de Corte Plena, estableciendo dichos documentos que su asistencia correspondía a una invitación realizada por la CSJ con fines de “coordinación interinstitucional”.

Sin embargo, al verificar el contenido del acta número 65, en su romano II al respecto únicamente establece: **“VISITA DEL SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA** y conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública, se aplica la reserva de la temática abordada a razón de lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de la materia”, constando en un auto **posterior a dicha visita**, de fecha 17 de septiembre de 2019, certificación de resolución emitida por la Corte en Pleno de la CSJ en el cual se fundamenta la citada declaración de reserva, en la que se manifiesta en lo sustancial:

“C. Ahora bien, retomando lo dispuesto en el Art. 86 inc. 1 parte final Cn., para que la Corte pueda ejercer aquellas funciones se necesita de la ayuda o cooperación interinstitucional, es decir de aquellos organismos o instituciones que coadyuvan a la protección y defensa de los derechos fundamentales, tal es el caso de la Fiscalía General de la República quien como parte de sus atribuciones, conforme al art. 193 número tres de la Cn., le compete la dirección en la investigación del delito lo cual va en concatenación con

lo determinado en la Ley Orgánica de la FGR, específicamente en los Art. 13, 16 y 18 literal d) y l), así como Art. 74 inc. 1 Pr Pn., no se niega lo prescrito en el art. 74 inc.2 parte final Pr Pn., en cuanto a la publicidad de las políticas de persecución penal, ni tampoco lo establecido en el art. 76 del mismo cuerpo legal en relación a la publicidad de las actividades de investigación, pero como ya se dijo es acertado limitar tal circunstancia del Art. 6 literal e) de la LAIP. Por lo tanto, ambas instituciones, dentro de sus propios roles, pero encaminadas a un mismo fin, deben trabajar de manera conjunta tomar las medidas necesarias tanto para la administración de la pronta y cumplida justicia, Art. 182 atr. 5 Cn (sic), así como para la eficacia de la investigación de posibles hechos delictivos y la protección de las personas que pudieran ostentar calidad de víctimas.

D. Al entenderse que tanto la función que ejerce la Corte, como el Ministerio Público Fiscal, van de la mano de tal suerte que la deliberación de estos funcionarios estatales al ser del conocimiento público ciertamente puede causar “un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las leyes, tal cual lo dispone el Art. 19 literal f) de la LAIP y por tanto la Corte debe velar por “... las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales...” a los que hubiere lugar, evitando comprometer las mismas Art. 19 literal g) de la LAIP.

E. Es decir, que de facilitar la información que manejan los entes encargados para cumplir con la administración y cumplimiento de la pronta justicia, por un lado, y por otra la función investigativa se podría poner en riesgo la conservación de aquellos derechos fundamentales como decir el interés público estabilidad jurídica, justicia y el bien común, Art. 1 Cn., sobre todo ante la posibilidad del mal manejo de la información tomando en consideración lo que ya se ha mencionado como lo es la evidente inseguridad e índice delincuencia que se vive en este país, pudiendo utilizarse la información para entorpecer los mecanismos, estrategias o planes de seguridad que se hayan adoptado para la protección de los mencionados derechos.”

En consecuencia, de lo anterior, el motivo por el cual se niega el acceso a la información solicitada por SINEJUS en virtud de la declaración de reserva emitida al respecto, con base en el artículo 19 letras f) “La que causare un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o



en la verificación del cumplimiento de las leyes”; y g) “la que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso”, de la LAIP, por lo cual se procede a verificar la validez de los requisitos de legalidad, temporalidad y razonabilidad en el presente caso.

(III.) En ese sentido, el principio de publicidad establece que el acceso a la información pública es la regla general, mientras que la reserva de la misma es la excepción en casos puntuales; tiene su límite cuando existe una disposición legal anterior de interpretación restrictiva y que, conforme a la Constitución, esté justificada en razones que respondan a un interés superior o a un posible perjuicio directo o inminente para el Estado, persona o personas determinadas.

Bajo este contexto, al dar lectura a la declaratoria de reserva objeto de controversia (número 11, según índice de información reservada del Órgano Judicial⁹) se ordena reservar “punto de agenda número II de la sesión de Corte Plena de fecha 13 de septiembre de 2018”, sin determinar o delimitar cuál información en particular sí debe reservarse —en caso de ser pertinente—, y ante lo cual debe retomarse que las restricciones al Derecho de Acceso a Información Pública no deben ser genéricas, sino sólo referidas a casos concretos y a necesidades puntuales. Dicho de otro modo, “...*la negativa genérica, injustificada o cualquier restricción arbitraria al derecho de acceso a la información significaría un incumplimiento o un abuso de los deberes de su cargo por parte del funcionario que así se pronuncie o actúe...*” (Cfr. PIERINI, Alicia y LORENCES).

Aunado a lo anterior, se procede a verificar el cumplimiento de los tres requisitos señalados en los párrafos precedentes, iniciando con la **legalidad** del acta emitido, advirtiendo tanto del acta 65 que corresponde a la sesión de Corte Plena del 13 de septiembre de 2018 como de la resolución emitida por el ente obligado, en fecha 17 de septiembre de 2019, dicha declaratoria de reserva se pronunció desde el 13 de septiembre de 2018, convalidando la falta de su motivación el 17 del mes de septiembre del año recién pasado, reservando todo lo manifestado en el punto dos de la citada sesión de corte plena, de

conformidad a las letras f) y g) del art. 19 de la LAIP, por parte del ente obligado, por lo cual -en principio- su emisión goza de legitimidad, teniendo como fundamento legislación vigente y señalando que su restricción se debe principalmente a la colaboración que debe existir entre los órganos de gobierno en el ejercicio de sus funciones públicas (Art. 86 inc.1 Cn.).

Sin embargo, consideramos importante señalar que dejar transcurrir un año para realizar la motivación de la declaración de reserva de este caso, es un periodo de tiempo excesivo, careciendo de validez tal declaración ante esta omisión (Art. 21 de la LAIP), valorando que el acto administrativo ingresó al mundo jurídico carente de fundamentación, lo cual es totalmente contrario al Derecho de Acceso a la Información que -como se ha señalado previamente- tiene como regla general la máxima divulgación, y su excepción debe estar oportunamente razonada, pero al existir habilitación legal para realizar una convalidación del acto administrativo (Art. 41 de la LPA), se procederá hacer análisis de las valoraciones hechas por la Corte en Pleno el 17 de septiembre de 2019, partiendo de los principios de buena fe, probidad y lealtad.

Asimismo, tomando en cuenta que la jurisprudencia en materia Contencioso Administrativo, ha reconocido que “[I]a Administración Pública goza de la atribución de la Autotutela Declarativa, la cual consiste en asumir o presumir provisionalmente la validez de los actos, contratos, reglamentos que la misma realiza, garantizando la fuerza inmediata y directa de sus decisiones, de tal forma que ésta puede crear o extinguir derechos, establecer o modificar obligaciones, todo lo anterior por el interés general que la Administración Pública persigue ... Adviértase que esa presunción de validez, puede ser destruida ya sea por la propia Administración Pública, ya sea por los ciudadanos, para lo cual necesariamente se deberá obtener una declaración formal de la invalidez del acto administrativo”. Por lo cual, queda habilitado el derecho de la parte apelante de iniciar el proceso correspondiente respecto a la convalidación realizada en la declaración de reserva emitida por la Corte Suprema de Justicia el 17 de septiembre del año recién pasado, en caso de considerarlo pertinente.

En tanto, por la presunción de la validez de los actos administrativos, corresponde verificar si la motivación de dicha declaratoria de reserva es conforme a la LAIP, valorando que el Pleno de este Instituto es la máxima autoridad en la interpretación y aplicación de esta



norma (Art. 58 a) de la LAIP) con cual se busca reducir la arbitrariedad al momento de clasificar información pública y evitar denegaciones injustificadas a su acceso.

Al respecto, es importante señalar que el requisito de **razonabilidad** no se agota con la simple argumentación, sino que, como todo acto que emana de la Administración Pública, la motivación debe ser congruente, de no ser así, la reserva carece de sustento. Es así que en auto de fecha 17 de septiembre de 2019, Corte Plena de la CSJ emitió resolución tendiente a fundamentar la declaratoria de reserva realizada en el caso de estudio, siendo su argumento central la “cooperación interinstitucional” entre el Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República, a la que faculta el Art. 86 inc. 1 parte final.

En tal contexto, resulta pertinente señalar que es constitucionalmente permitido cualquier apoyo que se dé entre ambas instituciones de Estado, sin embargo, no puede obviarse que sus funciones devenidas también por Constitución, en principio son antagónicas, pues la FGR tiene la atribución exclusiva de la dirección de la investigación del delito y su consecuente inicio de acción penal (Art. 193 numerales 3 y 4 Cn.), procesos judiciales de los cuales les corresponderá decidir oportunamente al Órgano Judicial, por medio del aparato jurisdiccional creado para tal efecto –Juzgado de Paz, de Instrucción y sentencia [en primera instancia], Cámara de lo Penal [segunda instancia] y Sala de lo Penal [Casación]-.

En tal sentido, la CSJ tiene exclusivamente la potestad juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (Art. 172 Cn.) y en base a esa función Jurisdiccional conoce y dicta sentencia en el ámbito penal, para lo cual no necesita una estrategia con la FGR, pues el trabajo investigativo realizado por la FGR y la CSJ en su potestad de juzgar, es absolutamente independiente, siendo la imparcialidad y la legalidad, elementos esenciales en el ejercicio de sus funciones por lo cual en caso de haber una reunión de coordinación entre ambos órganos de Estado la misma debe ser ejercida con total publicidad, a efecto de promover la transparencia en su actuar.

Que si bien el ente obligado alega que existen acciones de seguridad social necesarias ante *“la posibilidad del mal manejo de la información, pudiendo utilizarse la información para entorpecer los mecanismos, estrategias planes de seguridad que se hayan adoptado”*, no puede tenerse por establecido un riesgo inminente y tampoco es parte de las atribuciones

de la CSJ la ejecución de planes de seguridad, por tanto no se tienen elementos de razonabilidad para el decreto de una reserva del punto de agenda número II de la sesión de Corte Plena de fecha 13 de septiembre de 2018, y sin hacer una adecuada interpretación de lo establecido en los literales f) y g) del Art. 19 de la LAIP.

Al tenor de lo anterior, haremos una breve referencia del contenido de ambos literales a fin de promover su adecuada utilización:

El literal f) del Art. 19 de la LAIP, permite la reserva de información que pudiera provocar *un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las leyes*. Es decir, esta causal comprende tanto los actos ilícitos considerados como delitos y que corresponden prevenir, investigar, perseguir y sancionar a sus autores, es decir, como lo hemos advertido previamente, será a la Fiscalía General de la República -con apoyo técnico de la Policía Nacional Civil- a quien por mandato constitucional le corresponde la investigación y persecución de tales delitos. Que en una segunda etapa, al judicializarse esas investigaciones, son los tribunales competentes a los que les corresponde juzgar a los responsables y sancionarlos. La parte final de este literal, se refiere a la posibilidad que tiene la Administración Pública -en casos previamente establecidos por ley- de verificar el cumplimiento de atribuciones o mandatos legales.

Bajo este parámetro, no se han aportado suficientes elementos que esta disposición sea aplicable al caso en concreto, al ser distintas las funciones que ejercen tanto el Órgano Judicial como la FGR en el tema de investigación y sanción de hechos punibles.

Ahora bien, respecto al literal g) del Art. 19 de la LAIP, se refiere a la información que al ser divulgada pudiera comprometer *las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso*. En esta normativa es clave tener en cuenta que se trata de un proceso activo -ya sea administrativo o judicial-, en tal caso debe ser plenamente establecido que no han finalizado dichos procesos, pues una vez cumplido tal requerimiento no tiene sentido limitar su divulgación. Bajo esta premisa, es reiterable que como regla general, no puede ser objeto de esta reserva procesos en los que están participando activamente la FGR y la CSJ, valorando el cumplimiento de sus funciones constitucionales,



ya que con ello se podría afectar la independencia con la que debe actuar cada una de estas instituciones.

Por tanto, no existe razonabilidad en el decreto de reserva de la información solicitada en el presente caso, resultando innecesario verificar el requisito de **temporalidad**, al ser evidente que lo pertinente es revocar la declaratoria de reserva, debiendo entregar el titular del Órgano Judicial a la parte apelante en el presente procedimiento, audio íntegro de la sesión de Corte Plena de fecha 13 de septiembre de 2018, desclasificando el romano II de la agenda realizada en esa fecha, habiéndose establecido que la información requerida se encuentra revestida de interés público, por las funciones constitucionales que realizan ambos órganos de Estado.

Haciéndose constar que la referida entrega de audio se realiza considerando que de conformidad a lo establecido en el Art. 12 del Reglamento Interno de la CSJ, dichas sesiones de Corte en Pleno son gravadas por el Presidente del Órgano Judicial, y valorando la forma en que se realiza la recopilación de dicha información, en caso de existir minutos de silencio dentro de la grabación, deberá dejarse constancia de los mismos en el acta de entrega a la Representación de SINEJUS.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 48, 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto, **resuelve:**

a) **Modificar** la resolución de la oficial de información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de fecha 29 de julio de 2019, respecto a la información requerida por el **Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS)**, consistente en: “a) se informe sobre las reuniones llevadas a cabo entre el año 2018 hasta la fecha que ejerció el señor Douglas Meléndez en su calidad de Fiscal General de la República con el Magistrado Óscar Armando Pineda Navas, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia; b) Sí hubo reunión con Douglas Meléndez con algunos u otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se le entregue la agenda que abordaron y los acuerdos tomados”; en el

sentido de confirmar lo resuelto respecto a lo requerido en el literal a) de la solicitud de información, modificándose únicamente lo referente a literal b) de la misma.

b) Ordenar al titular del Órgano Judicial desclasificar y entregar, la información objeto de controversia correspondiente a audio íntegro de la sesión de Corte Plena de fecha 13 de septiembre de 2018, incluyendo el romano II de la agenda realizada en esa fecha, en la cual consta “... *reunión de Corte Plena con el Ex fiscal Douglas Meléndez...*”, en el **plazo de cinco días hábiles**, y en caso existan minutos de silencios por el formato de grabación, deberá dejarse constancia de los mismos.

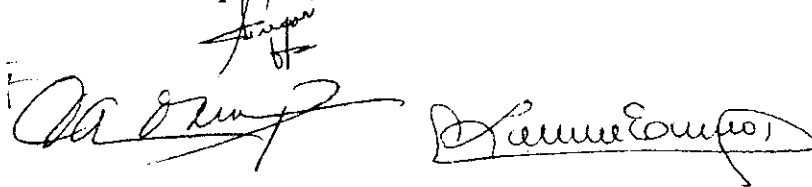
c) Ordenar a la **Corte Suprema de Justicia** que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en el literales b) de esta parte resolutive, la cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada a la parte apelante, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, pues con dicha resolución agota la vía administrativa de conformidad con el Art. 131 de la LPA, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

e) Remitir el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

f) Publíquese esta resolución, oportunamente.

Notifíquese. -

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, followed by two more signatures to its right. They appear to be official signatures of the officials mentioned in the text below.

PRONUNCIADO POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

SD/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil veinte.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP